

La España socialista

EL panorama que se dibuja en la política española tras las elecciones locales y autonómicas del domingo nos ofrece una estructura que ya ha sido comentada desde los primeros momentos de conocerse los resultados: Se avanza de manera significativa en la consolidación del famoso «bipartidismo imperfecto», que se inició entre PSOE y UCD, y se continúa ahora entre PSOE y la coalición AP-PDP-UL con las excepciones del País Vasco y de Cataluña, donde la confrontación se establece entre PSOE y PNV y CiU, respectivamente.

Pero esto no es definitivo en manera alguna. Es perceptible una tendencia, tanto por parte socialista como aliancista, a terminar con las fuerzas nacionalistas o incluso con los partidos de ámbito regional a los que se pretende incorporar a coaliciones con los «grandes». No se han consumado estas operaciones, desde luego, y ahí están el Partido Aragonés Regionalista, o la Unión del Pueblo Navarro, o el pequeño Partido Nacionalista Canario, para atestiguarlo. Sin embargo, la tendencia es la apuntada, y desde los estados mayores de los dos «grandes» probablemente se piensa que sólo es cuestión de tiempo. De momento, la hegemonía local y autonómica ya está en manos de socialistas o aliancistas, con las dos excepciones mencionadas. Y se va a seguir en esta dirección, según parecen señalar todos los indicios. La legislación electoral favorece, además este proceso de absorción, y únicamente partidos nacionalistas con una indubitable implantación, acompañada de la sistemática tarea de fomento y cuidado de una militancia entusiasta, pueden ir resistiendo por el momento.

Los resultados de CiU

El esfuerzo del vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra por disminuir, por minimizar, los resultados de CiU y del PNV se hizo patente en la conferencia de prensa que ofreció en la madrugada del lunes en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid. Llegó a hablar de descenso, o de retroceso, del partido catalanista, en medio de una selva de datos, cifras y porcentajes que iba dosificando para aparentar que la victoria socialista había sido mucho mayor de lo que en realidad fue, que ya es decir. Muchos periodistas picaron ese anzuelo, y ayer podían leerse en periódicos de Madrid varias referencias a los «castigos», los «correctivos» o las «pérdidas» de CiU, sin apoyar la valoración en dato alguno.

Jordi Pujol, en la misma madrugada del escrutinio, se preocupó de resaltar datos y porcentajes que evidenciaban



Dos situaciones muy parecidas, pero que reflejan situaciones muy distintas. En ambos casos dos políticos bien conocidos son saludados por unas simpatizantes, tras las elecciones. Pero si en el caso de Felipe González la alegría es desbordante ante la certeza del triunfo, en el de Garrigues Walker se capta la frustración —eso sí, serena— de un centro que prácticamente ha desaparecido de la geografía electoral

lo contrario de lo que se venía diciendo por la radio a raíz de la especie lanzada por Guerra. Pujol destacó, naturalmente, lo que le interesaba más, y no prestó mayor atención al hecho de que, junto al aumento de CiU, se registraban en Cataluña alzas espectaculares del PSOE, que despegaba en las grandes poblaciones hasta hacerse inalcanzable. Pero al menos Pujol no distorsionó los datos.

«Homogeneizar» los votos

Ahora bien, en el caso de Cataluña los problemas convergentes pueden venir más bien del crecimiento de Alianza Popular que del crecimiento del PSOE. La legislación electoral no consiente tres grandes formaciones en liza: han de ser dos, y la tercera queda ya muy descolgada. Una cuidadosa manipulación de las fechas electorales (la coincidencia de las locales y las autonómicas del domingo es políticamente muy importante para la «homogeneización» de los votos), más un habilidoso uso de la televisión en las campañas puede forzar en gran medida hacia la bipolarización.

Este es uno de los aspectos que se apuntan tras la consulta del domingo. Pero hay otra faceta que no debería quedar silenciada. Me refiero a las operaciones de horquilla política y económica que pueden ponerse en marcha entre ayuntamientos y diputaciones, por una parte, y el Gobierno central, por otra, frente a los gobiernos de las comunidades autónomas que resulten de distinto signo político.

Política de horquilla

La euforia de los máximos dirigentes socialistas anteañoche, haciéndose lenguas de las virtudes prácticas de que todo el poder esté en unas solas manos, puede ser bastante reveladora a este respecto. El planteamiento esquemático es relativamente sencillo: las comunidades autónomas son, como su nombre indica, autónomas; pero en su propio territorio existen corporaciones locales que son asimismo autónomas de los gobiernos regionales o nacionalistas, y que reciben los recursos económicos y financieros, estableciendo un puente, directamente del Gobierno central. Si a este planteamiento se añade la todavía pendiente LOAPA, la

nueva organización territorial del Estado puede acabar siendo un puro remedo de lo que inicialmente se preveía en el texto constitucional, en cuyo espíritu los gobiernos autonómicos tienen, evidentemente, un papel y una consideración bien diferentes de lo que pueden llegar a ser con esta política de horquilla.

Se avecinan tiempos que pondrán a prueba la capacidad de los socialistas de generar y fomentar controles ajenos a su propio partido. Con poder central, más una buena parte del poder regional, provincial y municipal, los socialistas españoles pueden convertir a este país en pocos años en algo prácticamente irreconocible. Sin una oposición actual, y lo que es más alarmante, sin una previsible alternativa en plazo razonable, esta España que ha votado mayoritariamente socialista puede ser en pocos años irreversiblemente socialista. Y si eso se produjese, uno de los pivotes sobre los que gira toda democracia, que es la capacidad de alternancia, habría sufrido un golpe mortal.